



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

P/Int.

Visto en Acuerdo de la Sala "B" integrada, el expediente N° FRO 4015/2024/1/CA1, caratulado "Legajo de Apelación en autos GIANELLI Rodrigo Luis Alberto por determinar" (del Juzgado Federal N°3, Secretaría "A" de Rosario), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Fiscal Federal Coadyuvante de la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo, Dr. Francisco Bernhardt, contra la providencia del 19/4/2024 que no hizo lugar al pedido de medidas solicitadas por esa parte.

Elevados los autos a esta Alzada, radicados en esta Sala "B", el Fiscal General interino Dr. Oscar Arrigo mantuvo el recurso y se remitió a los argumentos expuestos por quien le precedió en la instancia, los que solicitó que se tuvieran por reproducidos, se celebró audiencia en los términos del art. 454 del CPPN, se agregó la minuta sustitutiva presentada digitalmente por el Dr. Esteban Ortega por la defensa técnica de Gianelli y quedó la causa en estado de ser resuelta.

La Dra. Elida Vidal dijo:

1º) El magistrado instructor mediante providencia del 19/4/2024 denegó las medidas solicitadas por el Fiscal Coadyuvante en la Fiscalía Federal n° 3 de Rosario, concretamente el secuestro del: 1) vehículo tipo camión, marca Escania, modelo G340 BX4X2, dominio KEE744, y el respectivo acoplado marca Lambert, modelo A3IP, dominio colocado "NVY112", titularidad registral a nombre de José María Gambini, conducido por Gianelli; 2) dinero de moneda nacional en efectivo consistente en la suma de \$8.053.000.-; 3) seis cheques por una suma total de \$2.650.000.- y 4) teléfono celular marca Motorola color celeste, con fundamento en que "la procedencia del tipo de medidas que el fiscal pretende llevar a cabo debe encontrar asidero en lo requerido previamente por este Juzgado a la Fiscalía, respecto a la demostración de la plataforma fáctica que permitiese encuadrar los hechos en alguna figura penal que le sirviera de base para sostener sus tesis imputativa y



justificar la procedencia de las medidas cautelares que pretende llevar a cabo. Ello, en función de que no es posible disociar la calificación de los hechos resultante de los elementos con los que se cuenta en el sumario, de la valoración atinente a la procedencia de un medio cautelar que incide en los derechos fundamentales del sujeto investigado junto con los aspectos vinculados con la proporcionalidad y razonabilidad de la medida, como si se tratase de aspectos procesales que corren por separado, con total independencia uno del otro, ni mucho menos considerar procedente el acto de secuestro de los bienes del sujeto denunciado con base en una calificación jurídica que la fiscalía no puede demostrar fácticamente con los elementos con los que cuenta, ni siquiera en grado mínimo.”

“...Recordemos que en los presentes al sujeto denunciado se lo interceptó en la vía pública con motivo de un control vehicular documentológico y posteriormente se le incautó dinero en efectivo en moneda nacional de curso legal y títulos valores que aquel llevaba consigo en el interior del vehículo en el que se trasladaba y todo ello, sin que se lo haya observado en algún momento realizar conductas previas o hasta concomitantes al procedimiento por el cual se lo interceptó, vinculadas a algún delito de acción pública o con sustento en investigaciones anteriores que permitiesen ubicarlo en un contexto delictivo precedente. En consecuencia, ello en ningún caso podía permitir, con la información obtenida inicialmente, derivar en un encuadre jurídico diferencial de una conducta privada del investigado, sin trascendencia a terceros que se encuentra amparada por los arts. 17, 18 y 19 de la CN...”.

Agregó que “son dichas circunstancias tenidas en cuenta en concreto, las que obstan en sí mismas a la procedencia de las medidas que requiere la Fiscalía avanzando sobre las mismas pautas constitucionales indicadas anteriormente. En función de que si al tiempo de los hechos y hasta el momento, no existieron otros elementos que permitan encuadrar las conductas en una figura penal, no existiendo además investigaciones previas ni otros elementos de convicción que portasen mayores pruebas de cargo para la configuración de una hipótesis delictiva, el hecho de pretender incautar el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

dinero del sujeto denunciado (y hasta inicialmente el vehículo en el que se trasladaba), sobre la base de circunstancias que a todas luces se encontraron amparadas por dichas garantías constitucionales previstas en los artículos ya mencionados, y con el objeto de confirmar una tesis inculpativa, conculca a todas luces con el sentido que esas normas establecen en salvaguarda de conductas privadas de las personas sin trascendencia a terceros, del derecho de propiedad y la presunción de inocencia que asisten a todo individuo, constituyendo la proposición del Ministerio Público, lo que se conoce en el ámbito procesal como una “*excursión de pesca*”.

También señaló que “la sola valoración inicial y su adecuación hipotética a un determinado tipo penal importaría justificar la intromisión a los fines de confirmar ulteriormente la tipicidad de un hecho, que se insiste, se reduce a las circunstancias en que fue constatado y no encuadra de por sí, en ningún tipo penal.

En ese marco, es que las medidas de referencia no lucen acorde a los principios de proporcionalidad, necesidad y subsidiaridad, ni cumplen el contenido del texto de los autos que deberían instrumentarla con el recaudo de motivación suficiente, expresando de forma clara, precisa y concreta las circunstancias o constancias de determinadas piezas de la causa que resultaren suficientes, e ineludibles, para acordarle el debido sustento legal.”

Finalmente destacó que la facultad de control jurisdiccional reconocida legalmente para los casos previstos específicamente en el Código y en el marco de investigaciones delegadas en el Ministerio Público, no se desprende perjuicio alguno para dicho ministerio, puesto que dicha parte cuenta con la posibilidad de continuar con la investigación a los fines de reunir elementos inculpativos, que inclusive, permitan darle curso a otras pretensiones del estilo.

2º) El recurrente argumentó que la negativa de S.S. a las medidas de coerción solicitadas, le causan potencialmente un perjuicio que no podrá subsanarse en el transcurso del proceso.



Señaló que en el dictamen efectuado por ese Ministerio el 9/4 /2024 había advertido que la negativa a las medidas solicitadas oportunamente por la Fiscalía Federal n°3 de Rosario estaba relacionada con la falta de precisión del hecho objeto del proceso y su significación jurídica, que –en su criterio- fue correctamente determinado en sus circunstancias esenciales.

En cuanto a la procedencia del secuestro preventivo del dinero en efectivo y el celular indicó que ello obedecía al estado incipiente de la investigación y que la medida cautelar superaba las exigencias legales del art. 231 del CPPN.

Destacó que el secuestro de un bien en el estado primigenio de una investigación sólo exige para su procedencia que estén presentes en el caso las finalidades que constituyen su objeto de acuerdo con la norma procesal y citó doctrina en su apoyo.

Sostuvo que, en el caso, el hecho cuya materialidad fue correctamente descripta por el Fiscal preopinante, puede constituir prima facie dos delitos penales, un delito tributario (art. 1 de la ley 27.430) o el delito de lavado de activos en su versión de receptación intermedia (art. 303 inc. 3 del CP), pero cuya acreditación exige de un desarrollo probatorio en el que las medidas coerción rechazadas por S.S. son fundamentales.

Agregó que la devolución del dinero en efectivo, por medio de la resolución que se cuestiona, tornaría ineficaz todo el desarrollo de la causa y /o cualquier tipo de medida con la que podrían avanzar de probarse alguna de las hipótesis típicas posibles y que -a su modo de ver- el juez al rechazar el pedido de secuestro del celular y el dinero en efectivo impuso una exigencia que la norma procesal no contiene.

Expresó que el juez pretende la definición concreta de la hipótesis típica cuando se encuentran en los primeros pasos del caso desconociendo su carácter relativo. Y precisó que de acuerdo a la nueva ley procesal, la formalización de una investigación es el paso previo a su culminación definitiva como preparación del debate, por lo que en algunos casos supone que previo a ella, el fiscal pueda solicitar las medidas de coerción probatoria necesarias para sustentar su hipótesis.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Concluyó que los representantes del Estado y concretamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, cuentan con directivas relacionadas con el control sobre la circulación de instrumentos monetarios y dinero en efectivo -tanto adentro del país como en su ingreso y egreso del territorio aduanero-, motivadas en cuestiones de política monetaria/cambiaria y lineamientos de política criminal (Resolución PGN 1483/15).

Finalmente, señaló que el art. 23 del Código Penal y sus modificaciones avanzó sobre el decomiso del producto y provecho del delito; y que la negativa de S.S. al secuestro del dinero en efectivo y del celular de que quien lo transportaba, dejan privada a esa Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo de medidas probatorias indispensables en el marco de una instrucción delegada y eventualmente de procurar el recupero de los activos en caso de probarse alguna de las hipótesis típicas que puedan darse.

3º) El Dr. Esteban Ortega, defensor técnico de Gianelli sostuvo que resulta kafkiana la investigación sin calificación concreta y la ejecución de medidas cautelares consistentes en secuestro de propiedad privada sin siquiera convocar al ciudadano afectado a pesar de que se puso a disposición desde el momento de los hechos que motivaron las presentes actuaciones.

Señaló que su defendido fue detenido por Gendarmería Nacional en los límites de la localidad de Carcarañá, que esa misma noche se presentó en calidad de abogado defensor en las dependencias de la Fuerza de Seguridad con el objeto de aportar la documentación fiscal que acreditaba que el dinero en cuestión era bien habido y producto de una actividad hortícola de una empresa que tiene décadas en el mercado, pero no fue tomada en cuenta por la fiscalía.

Explicó que la realidad de los hechos concretamente es que Gianelli es un camionero que viajó por la ruta nacional con \$10.000.000.- en efectivo, cuyo trabajo era oficiar de fletero entregando mercadería por encargo de José María Gambini y recibiendo el pago de lo que entregó.



Sostuvo que las medidas pretendidas por la fiscalía deben ser rechazadas ya que no se da en el caso ninguno de los requisitos de procedencia relativos a la verosimilitud, humo de buen derecho, peligro en la demora ni peligrosidad procesal.

Agregó que esa parte no comprende y la fiscalía tampoco lo dijo, qué aporta el dinero secuestrado a la investigación penal, ya que si hubiera peligro en la demora o necesidad de cautela habría requerido las constancias fiscales acompañadas por su parte en reiteradas oportunidades.

Finalmente manifestó que tales medidas que llevan más de un mes afectan a su defendido causándole un perjuicio a su propiedad privada, al debido proceso y legalidad, por lo que solicitó que se ordenara devolver inmediatamente los efectos secuestrados.

4°) Cabe señalar que el art. 231 del CPPN establece que el juez puede disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a decomiso o aquellas que puedan servir de medios de prueba.

Conforme surge de las actuaciones sumariales obrantes en el principal, la presente causa se originó con motivo del parte preventivo n° 4/24 elevado por el personal de Gendarmería Nacional, en el que dio cuenta que dentro del marco de un operativo de control vial y fiscalización llevado a cabo el día 9/4/2024 en la Ruta Nacional 9, autopista Rosario-Córdoba, altura km 340 de la localidad de Carcarañá, se detuvo la marcha de un vehículo tipo camión, marca Escania, modelo G340 BX4X2 tipo chasis con cabina dormitorio, dominio KEE744, con acoplado marca LAMBERT, modelo A3IP, dominio NVY112, titularidad de José María Gambini, conducido por Luis Alberto Rodrigo Gianelli, se le solicitó la documentación personal y del rodado no constatando novedades. Posteriormente, se le requirió efectuar un control dentro del habitáculo (cabina), observando debajo del colchón de la cama del conductor, dos cajas cerradas con cinta de embalar, manifestando Gianelli espontáneamente que contenían dinero, que se las había entregado un puestero de verduras del mercado en la ciudad de Córdoba para ser trasladadas a la ciudad de Mar Del Plata por orden de su patrón, que desconocía la suma total y que no poseía documentación que avalara su





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

transporte. Ante dicha circunstancia, se solicitó apoyo al personal especializado del Grupo de Investigaciones Financieras y Patrimoniales de la Sección de Investigación Antidrogas "Rosario" -SEINAROS- a los fines de realizar las compulsas en las bases de datos fiscales para verificar la capacidad económica del ciudadano. Luego el personal de Criminalística y estudios Forenses de la Agrupación XV "Rosario" verificó que los ejemplares fueran de curso legal y contabilizaron la suma de \$8.053.000.- en efectivo y 6 cheques por un total de \$2.650.000.-

Consultado el titular del Juzgado Federal n° 3 de Rosario, una vez impuesto de las actuaciones, encomendó que se procediera a la constatación del domicilio del aprehendido, y que luego de ello se lo dejara en libertad supeditado a la causa; que se secuestrara el dinero y el celular Motorola de propiedad del involucrado y que se devolviera el vehículo designando a Gianelli como Depositario Judicial.

Recibidas las actuaciones, el titular del Juzgado corrió vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del CPPN, y le delegó la dirección de la investigación de conformidad con el art. 196 del CPPN, para el caso de que formulara requerimiento de instrucción.

El Fiscal coadyuvante de la Fiscalía Federal n°3 de Rosario solicitó que no se aplicara el procedimiento de la ley 22.272 y, en razón de revestir interés para la investigación, requirió el secuestro del vehículo conducido por Gianelli, el dinero hallado y su teléfono celular.

Mediante decreto del 11/4/2024, el juez a quo a los fines de proveer adecuadamente las pretensiones deducidas por la fiscalía, solicitó a esa parte que previamente indicara cuál era la calificación jurídica de los hechos por los que requería instrucción, debiendo en su caso establecer la plataforma fáctica del caso con sustento en la existencia de elementos mínimos que respaldaran la hipótesis delictiva.

Una vez contestada la vista, el juez rechazó el pedido de la fiscalía mediante la providencia ahora cuestionada.

5°) Ahora bien, analizadas las constancias de autos, comparto los fundamentos desarrollados por el juez a quo para denegar el pedido

Fecha de firma: 10/06/2024

Firmado por: ELIDA ISABEL VIDAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA VERONICA VILLATTE, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: ANIBAL PINEDA, JUEZ DE CAMARA



#38881379#415590633#20240610130727207

efectuado por la Fiscalía, en cuanto a que las medidas cautelares solicitadas son -por lo menos- prematuras y no respetan los aspectos vinculados con la proporcionalidad y razonabilidad para su procedencia.

Ello por cuanto, teniendo en cuenta que el hallazgo del dinero se produjo en el marco de un procedimiento de control de documentación vehicular, y que quien lo trasladaba no fue observado en ninguna conducta previa que pudiera vincularlo con algún delito, ni surge de las constancias de la presente causa que pudiera estar involucrado en alguna investigación en curso que lo ubicara en un contexto delictivo precedente, no se cuenta hasta el momento, con elementos concretos que avalen la procedencia de la pretensión fiscal.

En esta inteligencia tampoco se advierte en los escritos presentados por el fiscal interviniente (tanto en el del 9/4/24 como en el del 12 /4/24) que hubiera indicado concretamente qué elementos ha valorado para construir la hipótesis imputativa delineada, ni ha aportado otras pruebas en su refuerzo -conforme fuera previamente requerido por el juez- para justificar las medidas solicitadas, sino que solamente se ha limitado a afirmar que -por el estado incipiente de la investigación- su pedido obedeció a que dichos bienes tendrían interés probatorio y/o que en el caso de demostrarse que la conducta del sujeto investigado encuadra en el delito de evasión o de lavado de activos éstos podrían ser objeto de decomiso.

Asimismo no puedo soslayar dos cuestiones: por un lado, que de las actuaciones incorporadas al presente legajo surge que se presentó José María Gambini, en calidad de titular del dinero secuestrado, con el patrocinio letrado del Dr. Esteban Ortega y formalizó un pedido de devolución de los efectos secuestrados, acompañando documental (facturas fiscales emitidas en fecha y por montos que guardan relación tanto con la actividad que dijo desarrollar y con la suma de dinero habido en poder del conductor del camión) que -en principio- otorgaría verosimilitud a las explicaciones brindadas por Gianelli, lo que echa por tierra la falta de justificación de la tenencia de esa





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

cantidad de dinero. En ese contexto, tampoco existe sustento para el secuestro del teléfono celular de propiedad del conductor del camión, como lo pretende el Fiscal.

Po otro, resulta de interés señalar que -conforme fuera oportunamente ordenado por el titular del juzgado- se devolvió el camión marca Scania, modelo BX4X2, dominio KEE744, designando como Depositario Judicial a Luis Alberto Rodrigo Gianelli, por lo cual su sujeción a la causa también estaría salvaguardada.

En función de lo precedentemente expuesto, teniendo presente que lo pretendido por la fiscalía vulnera los derechos fundamentales del sujeto investigado y que no encuentra correlato con la existencia de otros datos probatorios que permitan construir una tesis delictiva superadora de los extremos incluidos inicialmente en el sumario, por el momento, la denegatoria del magistrado no evidencia que en las condiciones reseñadas concorra el gravamen irreparable, actual y concreto que requiere toda apelación, correspondiendo -en mi criterio- rechazar el recurso interpuesto.

Por otra parte, en este caso, tal como lo señaló el juez en su decisión, no se advierte que únicamente con la medida pretendida por el Fiscal, esto es, el secuestro del dinero hallado y del celular de propiedad de Gianelli, pudiera obtener la prueba necesaria para sustentar una futura acusación penal, y su negativa, no obsta a que se profundice la investigación con otras, a fin de determinar si el sujeto involucrado podría incurrir en maniobras delictivas vinculadas con los arts. 1 de la ley 27.430 y/o 303 del C.P., por lo que no se ha demostrado el perjuicio irreparable alegado por ese Ministerio.

En virtud de lo expuesto, considero que corresponde confirmar la decisión apelada. Así voto.

El Dr. Aníbal Pineda adhirió a los fundamentos y conclusiones del voto precedente.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede,
SE RESUELVE:

Fecha de firma: 10/06/2024

Firmado por: ELIDA ISABEL VIDAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA VERONICA VILLATTE, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: ANIBAL PINEDA, JUEZ DE CAMARA



#38881379#415590633#20240610130727207

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal Coadyuvante de la Sede Descentralizada de San Lorenzo Francisco Bernhardt contra la providencia del 19/4/2024. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada N° 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. La Dra. Andalaf Casiello no vota de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del art. 31 bis del CPPN modificado por el art. 4° de la ley 27.384. (Expte. N° FRO 4015/2024/1/CA1).

Fecha de firma: 10/06/2024

Firmado por: ELIDA ISABEL VIDAL, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA VERONICA VILLATTE, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: ANIBAL PINEDA, JUEZ DE CAMARA



#38881379#415590633#20240610130727207